

# Los peritos médicos, psiquiatras y psicólogos, y el nuevo Código Procesal Penal Federal. Su participación en el sistema penal acusatorio<sup>1</sup>

**Dr Ariel Rossi**

Doctor en Ciencias Médicas. Facultad de Ciencias Médicas, Universidad Nacional de la Plata.

Doctor de la Universidad de Buenos Aires, área Medicina Legal y Toxicología. Docente Autorizado, Cátedra de Medicina Legal y Deontología Médica. Facultad de Medicina, Universidad de Buenos Aires.

Argentina.

### Resumen

En junio de 2019 comenzó a aplicarse el nuevo Código Procesal Penal Federal, que adopta como sistema de enjuiciamiento el modelo acusatorio. Este modelo implementa la oralidad, la inmediatez, la contradicción y la publicidad como guías de los procesos judiciales. En este sistema el rol de los peritos juega un papel fundamental para el que deben estar preparados.

**Palabras claves.** Código procesal penal federal, sistema penal acusatorio, peritos.

### Medical experts, psychiatrists and psychologists, and the new Federal Criminal Procedure Code. Their participation in criminal trials in adversarial system

#### Summary

In June 2019, the new Federal Criminal Procedure Code began to be used, which adopts the adversarial

model as a system of prosecution. This model implements orality, immediacy, contradiction and publicity as guides to judicial processes. In this system the role of the experts plays a fundamental role for which they must be prepared.

**Key words.** Federal criminal procedure code, adversarial system in criminal trials, experts.

### Introducción

La Ley 27.482 y su Decreto Reglamentario 118/2019 modifican el vigente Código Procesal Penal de la Nación, que actualmente se denomina Código Procesal Penal Federal (CPPF). Su implementación comenzó a realizarse paulatinamente desde el 10 de junio de 2019.

El nuevo CPPF adopta como sistema de enjuiciamiento el modelo acusatorio, dejando atrás el viejo sistema mixto con claros tintes inquisitivos. Este cambio de paradigma implica tanto profundas transformaciones en la administración de justicia, en las funciones y los roles asumidos por cada uno de los sujetos que intervienen, como también en las etapas del propio proceso penal. Impone la oralidad, la inmediatez, la contradicción y la publicidad como guías de los procesos judiciales. Con el nuevo CPPF se busca desformalizar y agilizar los procesos y generar mejores resultados en la gestión judicial. Ello implica un cambio cultural en los operadores de la justicia y en la comunidad en general, donde los peritos han de jugar un papel fundamental para el que deben estar preparados.

---

**Correspondencia.** Dr Ariel Rossi

Correo electrónico: dosrossiariel@hotmail.com

## **La Reforma del Código Procesal Penal Nacional (CPPN)**

El Derecho Procesal es aquella rama de la ciencia del derecho que estudia las atribuciones, competencia, funcionamiento y organización de los tribunales de justicia y considera las normas de procedimiento que deben ser utilizadas por las personas en el planteamiento de sus pretensiones y contrapretensiones ante los órganos jurisdiccionales.

Es decir, el Derecho Procesal regula las formas acerca de cómo se discuten y resuelven las cuestiones que se someten al tribunal.

El CPPN fue modificado íntegramente y pasó a llamarse CPPE, modificando de manera sustancial el Proceso Penal. Este nuevo sistema propone que se respeten los derechos tanto de la víctima como del presunto responsable del hecho delictivo, con el fin de preservar la presunción de inocencia del imputado. Con ello se aseguraría un proceso justo, apegado al derecho, en el que se respeten los derechos humanos de las partes y se agilice el proceso penal.

Este sistema adversarial<sup>2</sup> cuenta con un juez encargado de decidir de manera imparcial las solicitudes de las partes intervinientes con el fin de resolver en corto tiempo los conflictos jurídicos en audiencias orales públicas y contradictorias.

El nuevo modelo exige un mejor desempeño profesional, con un más eficaz control y garantías a través de las figuras de los jueces de control, al permitir la libre valoración de las pruebas durante el juicio, con el fin de que se apeguen a los hechos, los argumentos, las pruebas presentadas y las contradicciones planteadas.

La reforma no solo implica un compromiso para los peritos participantes, sino que conlleva una reestructuración en las instituciones que procuran e imparten justicia y del personal que colabora en un juicio penal, pues se requiere de compromiso con los nuevos roles que desempeñarán en el proceso. De igual forma, es necesario mejorar el equipamiento, la tecnología y la capacitación que cada institución participante requiera para el debido cumplimiento de sus objetivos, pues deben dar una respuesta eficaz a los requerimientos que el nuevo sistema demanda.

El nuevo CPPE incorpora cuatro principios:

1. Celeridad: los casos deben resolverse más rápido. Distintos relevamientos muestran que la lentitud con la que se tramitan las causas es el principal motivo por el que reclama la ciudadanía.

2. Oralidad: más audiencias orales y menos procedimientos escritos. La oralidad permite prescindir del expediente tradicional, por lo que se aceleran los tiempos. Además, enfrenta cara a cara a las partes con el juez.

3. Publicidad: la sociedad debe poder acceder a las audiencias y publicaciones.

4. Desformalización: menos exigencias administrativas y procesales, para que se agilicen los trámites, evitando temas burocráticos innecesarios.

## **¿Cuáles son las diferencias entre el Sistema Procesal Penal Inquisitivo y el Acusatorio?**

### **Sistema Procesal Penal Inquisitivo**

En el modelo de corte inquisitivo el rol del juzgador se confunde con el de investigar, ya que ambas tareas pueden ser realizadas por una misma persona. Así, el juez asume un rol de parte en el proceso pues investiga, instruye, persigue y, al mismo tiempo, valora la prueba y decide sobre la cuestión.

En un proceso de características inquisitivas, la averiguación de la verdad como objetivo principal impone que, para cumplir dicha meta, pueda utilizarse cualquier medio. El objetivo del juzgador es averiguar la verdad, por lo que puede intervenir en el proceso frente a la inactividad de las partes. De allí surge la facultad del juzgador de poder interrogar al imputado, ordenar elementos probatorios o interrogar testigos, aun sin el requerimiento de ninguna de las partes. En el modelo inquisitivo, su nota distintiva es la concentración de poder en manos del juzgador, es decir, del poder de perseguir y decidir.

La facultad del acusador será la de impulsar la acción penal, pero la investigación estará en manos del juez. Podrá proponer prueba, participar en su producción, pero siempre a instancias del juzgador. No posee facultades amplias para llevar adelante la acusación como consecuencia derivada de compartir dicha tarea con el juez.

El acusado tiene las facultades de elaborar su defensa, pero deberá efectuarla no frente al acusador, sino frente al juzgador. En un proceso de fuerte raíz inquisitiva, la defensa, podrá ser utilizada como objeto del proceso, en cuanto a material probatorio, y no como sujeto del mismo, encontrándose así con fuertes limitaciones en el ejercicio de su defensa.

En el proceso inquisitivo reformado (o mixto) el imputado es sujeto de derechos y posee libertad de defensa durante el proceso, aunque con fuertes limitaciones en la etapa preliminar o de instrucción, donde su participación se encuentra reducida o es prácticamente nula. Por su parte, el imputado recobra total protagonismo en la etapa de debate o plenario.

### **Sistema Procesal Penal Acusatorio**

En cambio, en el modelo de corte acusatorio el rol del juzgador es netamente el de valorar la prueba aportada por las partes (acusador y acusado), decidiendo sobre esta, pero sin participar en su recolección. El juzgador se mantiene fuera de la contienda; la observa pero no participa de ella.<sup>3</sup>

Por su parte, el acusatorio es un proceso contradictorio, de contienda de partes, por lo que el acusador y el acusado se tornan protagonistas. En reemplazo de la concentración de poder que sugiere el proceso inquisitivo, en el proceso acusatorio rige la división de poderes. Así, sin el acusador no existe el proceso pues el juzgador no podrá ir más allá de la imputación. El fiscal tiene a su cargo la investigación e impulso de la acción.

El acusado es un sujeto de derechos, que se encuentra en situación de igualdad ante el acusador, y ejerce su defensa ante este.

En el proceso de base acusatoria, la búsqueda de la verdad no será por cualquier medio, sino por el que las partes propongan; el juzgador controlará, pero su límite será impuesto por la acusación. Vale decir, que no puede decidir más allá de lo que las partes proponen. El juzgador no puede por sí solo ordenar medidas de prueba, interrogar al imputado ni a los testigos propuestos, solo se limita a juzgar la contienda de las partes.

Concretamente, esa forma de desarrollar la investigación se llama sistema acusatorio adversarial. La denominación tiene que ver con el rol que ocupan las tres partes que intervienen: el juez, la defensa y la fiscalía.

Adversarialidad es, precisamente, la oposición que existe entre un defensor, que busca el cumplimiento de las garantías del imputado, y un fiscal, que lleva adelante la acusación.

Es acusatorio porque brinda las herramientas al Ministerio Público Fiscal (MPF) para poder avanzar en la investigación y que el juez observe de forma imparcial el proceso.<sup>4</sup>

El objetivo no es sacarle el poder al magistrado para pasárselo a los fiscales, sino ayudar a los fiscales a cumplir con su función y que puedan investigar sin quitarle espacio a la defensa, y que los defensores puedan acceder a toda la causa y que todos tengan pleno conocimiento de lo que pasa en el proceso.

El impulso de los fiscales a las investigaciones puede redundar en mejoras en causas con hechos que suelen ser complejos, es decir, que incluyen más de un tipo penal,<sup>5</sup> como sucede en el Fuero Federal. Cuando se investiga una organización delictiva generalmente hay más de un delito en juego.

Esa complejización de las causas torna todavía más dificultoso el camino a recorrer por los jueces, quienes, por ejemplo, deben decidir sobre la excarcelación de un imputado a la vez que investigan su responsabilidad.

Los delitos investigados actualmente por jueces de instrucción o de primera instancia con competencia federal son los que afectan intereses federales, y los que apuntan contra “la renta y la seguridad de la Nación”, el contrabando, el tráfico de drogas, la evasión fiscal, el lavado de dinero, etcétera.

**Tabla 1.** Cuadro comparativo: sistema inquisitivo – sistema acusatorio.

Sistema inquisitivo escrito	Sistema acusatorio
Violaciones sistemáticas a la presunción de inocencia, se detiene para investigar	Presunción de inocencia como norma, se investiga para detener.
Se rige por escritos que van integrándose en un expediente y donde tienen mayor valor probatorio los realizados por el ministerio público.	Se rige por un sistema de audiencias en presencia del juez, donde, con equidad entre las partes, ambas posturas se presentan verbalmente, excluyendo la prueba obtenida por medios ilícitos.
El imputado es un objeto dentro del sistema, a quien se le juzga a través de documentos.	El imputado es un sujeto de derecho a quien se lo escucha para ser juzgado por un sistema humanista.
Los escritos generan incertidumbre y desconfianza, al ser personas no profesionales (escribientes) las que valoran la información que se genera, o al delegarse esta función a secretarios.	Los procesos generan credibilidad y confianza, pues la información que en ellos se obtiene es valorada directamente por el juez.
En los escritos se limita el derecho a la defensa y la participación directa de la víctima.	Los procesos garantizan la participación activa del acusado y la víctima.
La confesión ante agentes investigadores tiene valor probatorio y se utiliza de manera generalizada.	La confesión del imputado no tiene valor probatorio a menos que la rinda frente al juez.
Los escritos aplican de manera automática la prisión preventiva.	Se racionaliza el uso de la prisión preventiva, aplicándola excepcionalmente.
Los escritos sacrifican la conciliación entre las partes y no prevén salidas alternas, lo que impide brindar una justicia eficiente.	Los procesos incluyen el uso de salidas alternas a juicio, con el fin de mejorar y agilizar el sistema de justicia.

**Tabla 1.**

Sistema inquisitivo escrito	Sistema acusatorio
Un mismo juez lleva adelante todo el proceso, por lo cual es muy factible que prejuzgue.	El juez de control o garantías se encarga de las etapas previas al juicio, en tanto que el juez “oral” –o jueces– preside la audiencia del juicio sin tener conocimiento previo del asunto, para evitar el prejuzgamiento.
Los juicios (escritos) son cerrados y generan corrupción.	Los juicios se rigen por los principios de oralidad, publicidad (abiertos al público y transparentes) inmediación, contradicción, concentración y continuidad.
Los juicios (escritos) son muy lentos e informales. El promedio de duración de un juicio oscila entre uno y tres años.	Los juicios orales dan orden y unidad, y son expeditos en su desahogo, en un tiempo relativamente breve.
No existen incentivos ni reglas para la actuación científica y profesional de las partes.	Genera incentivos y reglas para la actuación científica y profesional de las partes.

### Diferencias entre testigo y perito

La intervención pericial del médico, el psiquiatra y el psicólogo en el sistema penal acusatorio es un tema de vital importancia, pues exige de los participantes un desempeño profesional de alta calidad y compromiso con la impartición de justicia. El perito debe conocer la jurisprudencia correspondiente y contar tanto con una preparación académica de excelencia como con experiencia laboral que sustente su dictamen y proporcione elementos a los jueces y magistrados para llegar a conclusiones precisas sobre el hecho investigado.

### El Perito

“Los peritos médicos, psiquiatras y psicólogos no son testigos, son peritos”.

Muchas veces se confunde al perito con el testigo, cuando en realidad se trata de dos actores muy diferentes en el proceso penal y que están llamados a cumplir roles y finalidades distintas.

Es importante tener claras las diferencias que existen entre el perito y el testigo, teniendo presente que todos podemos ser testigos en un momento determinado de nuestra vida, al conocer algo relevante e importante de algún hecho que se investigue.

Existen dos tipos de peritos: judiciales (forense), nombrado por la justicia, o de parte, nombrados por la defensa y/o la parte acusadora.

**Art. 167-** Procedencia. Si para conocer o apreciar un hecho resultaran necesarios conocimientos especiales en alguna ciencia, arte o técnica, las partes podrán presentar informes elaborados por peritos de su confianza en cuyo caso deberán acompañar los elementos que acrediten la idoneidad profesional de aquellos.

El perito es un experto que tiene conocimientos en una determinada ciencia, arte o técnica, y es esa calidad por la que es llamado al proceso. Incluso, no puede servir como perito quien tenga conocimiento “sobre hechos o circunstancias que conoció directamente”. En este caso se trataría propiamente de un testimonio.

Para ser nombrado perito deben reunirse los requisitos establecidos en el artículo 168 del CPPF.

**Art. 168-** Calidad habilitante. Los peritos deberán tener título habilitante en la materia relativa al punto sobre el que dictaminarán, siempre que la ciencia, arte o técnica esté reglamentada. En caso contrario deberá designarse a una persona de idoneidad manifiesta.

No podrán desempeñarse como peritos las personas a quien la ley reconociere la facultad de abstenerse de prestar declaración testimonial.

No regirán las reglas de la prueba pericial para quien declare sobre hechos o circunstancias que conoció espontáneamente aunque utilice para informar las aptitudes especiales que posee en una ciencia, arte o técnica. En este caso regirán las reglas de la prueba testimonial.

El perito puede ser designado por el MPF, durante la etapa preparatoria, o ser nombrado por el juez, el tribunal, o a propuesta de las partes.

**Art. 169-** Instrucciones. Durante la etapa de la investigación preparatoria, las partes podrán solicitar al representante del Ministerio Público Fiscal las instrucciones necesarias para que sus peritos puedan acceder a examinar los objetos, documentos o lugares a que se refiere su pericia o para cualquier otro fin pertinente. El representante del Ministerio Público Fiscal accederá a la solicitud a menos que, presentada du-

rante la etapa de investigación preparatoria, se considere necesario postergarla para proteger el éxito de aquélla. El representante del Ministerio Público Fiscal podrá oponerse dentro de los cinco (5) días si existieran fundadas razones. Ante la oposición, podrá recurrirse ante el juez, quien resolverá en audiencia. Los peritos procurarán practicar juntos el examen.

El perito es citado por el MPF o por el juez o tribunal de la misma forma que los testigos y tiene el deber de comparecer y desempeñar las funciones puestas a su cargo.

El imputado, la víctima y la querella<sup>6</sup> también pueden solicitar la asistencia de peritos de parte.

El perito no tiene, antes de realizar el dictamen pericial, conocimiento de los hechos discutidos en el juicio.

El perito es sustituible pues basta con encontrar a otro técnico que quiera proceder a la valoración.

La actuación del perito es remunerada, a diferencia del testigo.<sup>7</sup>

El perito debe realizar la prueba pericial con objetividad, imparcialidad e independencia.

El perito que no realiza el peritaje, o desempeña mal su función, conforme el CPPF, puede ser reemplazado.

El perito no comete delito si se equivoca de buena fe.

El perito puede declinar su nombramiento ante el MPF, el juez o el tribunal, indicando un motivo de incapacidad, por no ser idóneo, o por tener un impedimento grave.

En caso de un peritaje dudoso, insuficiente o contradictorio, puede ordenarse su ampliación o la realización de otro peritaje.

El perito presenta los resultados del peritaje en un informe que se denomina "dictamen pericial", que contiene una relación detallada de las operaciones realizadas y sus resultados, y sobre todo de las conclusiones a que se arriben en cada aspecto.

El Dictamen pericial se presenta por escrito.

**Art. 170-** Dictamen pericial. El dictamen será fundado y contendrá, de manera clara y precisa, una relación detallada de las operaciones practicadas y sus resultados, las observaciones de las partes o de sus consultores técnicos y las conclusiones que se formulen respecto de cada tema estudiado. Los peritos podrán dictaminar por separado en caso de que exista diversidad de opiniones entre ellos. El dictamen se presentará por escrito firmado y fechado, sin perjuicio de la declaración en las audiencias.

El perito tiene la obligación de comparecer a las audiencias y presentar un informe oral sobre el peritaje que no puede ser sustituido por la lectura del dictamen pericial.

El perito, a diferencia del testigo, cuando presenta su informe en el juicio, tiene la facultad de consultar documentos, notas o publicaciones.

**Art. 299-** Peritos. Los peritos presentarán sus conclusiones oralmente. Para ello, podrán consultar sus informes escritos y valerse de todos los elementos

auxiliares útiles para explicar las operaciones periciales realizadas.

Se puede ordenar, siempre que sea posible, que sean realizadas o recreadas las operaciones periciales en la audiencia.

El perito antes de presentar su informe en la audiencia es advertido de que puede comprometer su responsabilidad penal y civil sea por perjurio, falsedad o falsificación de la prueba testimonial.

**Art. 297-** Interrogatorio. Los testigos y peritos, luego de prestar juramento o promesa de decir verdad y haber sido instruidos sobre las prescripciones legales previstas para el falso testimonio, serán interrogados por las partes, comenzando por aquella que ofreció la prueba.

En el caso de que la pericia sea solicitada a una institución, se regirá por el artículo 171 del CPPF.

**Art.171-** Instituciones. Si el peritaje se encomendara a una institución científica o técnica y en las operaciones debieran intervenir distintos peritos o equipos de trabajo, se podrá elaborar un único informe bajo la responsabilidad de quien dirija los trabajos conjuntos, el que será suscripto por todos los intervinientes.

En el caso de los peritajes especiales, los mismos se deberán regir por el artículo 172.

**Art. 172-** Peritajes especiales. Si debieran realizarse diferentes pruebas periciales a niños, niñas y adolescentes o personas afectadas psicológicamente, se procurará concentrar la actividad de los peritos, ordenando que actúen conjunta e interdisciplinariamente.

El perito participará de los procedimientos para individualizar a las personas (Art. 175), de la identificación de los cadáveres y autopsias (Art. 179) y de exámenes corporales necesarios para constatar circunstancias relevantes para la investigación (Art. 181).

**Art. 175-** Individualización de personas. Podrá ordenarse la obtención de ácido desoxirribonucleico (ADN) del imputado o de otra persona si ello fuere necesario para su identificación o para la constatación de circunstancias de importancia para la investigación. Para tales fines, serán admisibles mínimas extracciones de sangre, saliva, piel, cabello u otras muestras biológicas, a efectuarse según las reglas del saber médico si no existiere perjuicio alguno para la integridad física de la persona sobre la que deba efectuarse la medida, según la experiencia común y la opinión del experto a cargo de la intervención. La misma será practicada del modo menos lesivo para la persona y sin afectar su pudor, teniendo especialmente en consideración su género y otras circunstancias particulares. El uso de las facultades coercitivas sobre el afectado por la medida en ningún caso podrá exceder el estrictamente necesario para



su realización. Si se estimare conveniente, y siempre que sea posible alcanzar igual certeza con el resultado de la medida, podrá ordenarse la obtención de ácido desoxirribonucleico (ADN) por medios distintos a la inspección corporal, como el secuestro de objetos que contengan células ya desprendidas del cuerpo para lo cual podrán ordenarse medidas como el registro domiciliario, la requisita personal, o procedimientos inocuos que impliquen la descamación de células o piel. Asimismo, en el caso de un delito de acción pública en el que se deba obtener ácido desoxirribonucleico (ADN) de la presunta víctima del delito, la medida se practicará teniendo en cuenta tal condición, a fin de evitar su revictimización y resguardar los derechos específicos que tiene. En ningún caso regirá la facultad de abstención prevista en este Código. Si la persona que ha de ser objeto del examen, informada de sus derechos, consintiere en hacerlo, el representante del MPF ordenará que se practique sin más trámite. En caso de negarse, se solicitará la correspondiente orden judicial, exponiéndose al juez las razones del rechazo. El juez ordenará la diligencia siempre que se cumplieren las condiciones señaladas en el párrafo primero de este artículo, justificando su necesidad, razonabilidad y proporcionalidad en el caso concreto.

**Art. 179- Identificación de cadáveres y autopsias.** Si la investigación versare sobre la muerte sospechosa de haber sido provocada por un hecho punible, antes de procederse a la inhumación del occiso o después de su exhumación, el representante del MPF, con comunicación a la defensa, ordenará la realización de la autopsia y descripciones correspondientes. La identificación se efectuará por medio de testigos, muestras dactiloscópicas o, de no ser posible, por otro medio idóneo.

**Art. 181- Exámenes corporales.** Si fuere necesario para constatar circunstancias relevantes para la investigación, podrán efectuarse exámenes corporales al imputado o al presunto ofendido por el hecho punible, tales como pruebas de carácter biológico, extracciones de sangre u otros análogos, siempre que no existiere riesgo para la salud o dignidad del examinado. Si la persona que ha de ser objeto de examen, informada de sus derechos, consintiere en hacerlo, el representante del MPF ordenará que se practique sin más trámite. En caso de negarse, se solicitará la correspondiente autorización judicial, exponiéndose al juez las razones del rechazo. El juez ordenará la diligencia siempre que se cumplieren las condiciones señaladas en el párrafo primero de este artículo.

### El testigo

El testigo es la persona que aporta un testimonio o prueba testimonial, quien, normalmente por razones ajenas a su voluntad, conoce acerca de las

circunstancias de la comisión de un determinado hecho punible.

Existen dos tipos de testigos: presenciales (estuvo en el momento del hecho), y de conocimiento (conoce algo del hecho en cuestión).

El testigo puede ser llamado por el MPF, por el juez o el tribunal a sugerencia de las partes.

El testigo es insustituible en cuanto se le llama por poseer unos conocimientos directos de los hechos relevantes.

El testigo delinque cuando no dice la verdad.

La actuación del testigo no es remunerada, a diferencia del perito.

El testigo está obligado a comparecer a la citación y declarar la verdad,<sup>8</sup> salvo las excepciones que establece la ley.<sup>9</sup>

En el caso de que el testigo sea médico o psicólogo, puede abstenerse de declarar si la declaración lesiona el secreto profesional. Solo podrá hacerlo si es liberado por el interesado del deber de guardar secreto.

**Art. 160- Facultad y deberes de abstención.** Podrán abstenerse de declarar el cónyuge o conviviente del imputado, los parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, sus tutores, curadores y pupilos. Las personas mencionadas serán informadas sobre su facultad de abstenerse antes de iniciar la declaración. Ellas podrán ejercerla aun durante su declaración, incluso en el momento de responder determinadas preguntas. Deberán abstenerse de declarar sobre los hechos secretos que hubieren llegado a su conocimiento en razón del propio estado, oficio o profesión, los ministros de un culto admitido, los abogados, procuradores, escribanos, médicos, farmacéuticos, parteras y demás auxiliares del arte de curar; los militares y funcionarios públicos sobre secretos de Estado. Estos últimos no podrán negar su testimonio cuando sean liberados del deber de guardar secreto por el interesado.

El testigo que no comparece puede ser conducido por el MPF,<sup>10</sup> y sancionado como testigo reticente.

### El papel del perito

Los profesionales que participan como peritos deben contar con una preparación especial, pues son considerados expertos en una materia, ciencia o arte, con la que contribuyen aportando información especializada sobre su materia y que sirve a los agentes del MPF, defensores, jueces y magistrados para llegar a conclusiones sobre el caso que se está investigando. Ser especialista en una materia requiere no solo una formación académica adecuada y profunda, sino también una experiencia práctica que le permita realizar el análisis más adecuado y pertinente del caso, con el debido fundamento técnico científico que permita su comprobación de acuerdo con la ciencia. La participación pericial está legislada como prueba en el CPPF, como ya se ha

mentionado en los artículos 167 al 172.

El perito no puede ser un improvisado, debe tener vastos conocimientos en la rama de la ciencia sobre la que tendrá que intervenir, lo que solo se consigue con la especialización y la experiencia.

No es suficiente tener un magíster teórico sin las debidas prácticas que permiten tener la suficiencia de elaborar un criterio propio. Se precisa de una especialización que haya permitido la aplicación de las nociones científicas a la investigación judicial; ella nos conduce a desarrollar algunas nociones especiales.

Se entiende generalmente que si se cuenta con una especialidad, maestría o doctorado, es, en cierto modo, garantía de idoneidad del perito, pero no siempre es así.

La participación como perito implica una responsabilidad administrativa que es sancionable cuando no se realiza debidamente. Estas sanciones varían desde una amonestación verbal o monetaria, la inhabilitación hasta incluso una pena privativa de libertad.

Por ejemplo, el psicólogo o psiquiatra está habituado a evaluar las frecuentes disimulaciones de los pacientes psiquiátricos en los hospitales. Como peritos deben estar capacitados no para descubrir el síntoma que se disimula, sino para descubrir al que simula. La simulación implica manifestaciones tales que solo pueden detectarse mediante una preparación especial.

Se requiere además una fuerte y sólida formación para comprender la o las anomalías y sus posibilidades, y determinar si el peritado tiene o no la capacidad para ser imputable. Se precisa tener conocimiento de los usos y costumbres en los tribunales, lo que implica conocimiento del Código Penal, del Código Procesal y de la jurisprudencia coin relación al tema de su pericia.

Nerio Rojas dice: "No hay que olvidar que no basta ser un buen médico para ser un buen perito".

Para llegar a ser buen perito, indudablemente es necesario ser buen profesional, pero esto no es suficiente. También es menester que el individuo sepa formarse una mentalidad jurídica sólida y, que logre volver a pensar jurídicamente los hechos biológicos comprobados por las indagaciones clínicas.

Como dice Gisbert Calabuig, para ser un buen perito es necesario tener condiciones ético-científicas; formación especializada, teórica y práctica del vasto campo de la medicina legal; formación básica médica, teórica y práctica; conocimientos jurídicos; objetividad; reflexión y sentido común; juicio para jerarquizar los hechos; prudencia en la elaboración de los dictámenes y, sobre todo, en la formulación de las conclusiones; imparcialidad y veracidad.

También es necesario tener los conocimientos jurídicos que permitan captar exactamente el objeto de los puntos de pericia y el alcance de las conclusiones que aporte en sus informes. El juez ha de tomar decisiones muy importantes y de grandes consecuencias

(prisión, incapacitación, inhabilitación, indemnizaciones, etc.) que implican una gran responsabilidad, sobre la base del asesoramiento que recibe en materias que desconoce, las que el perito ayuda a esclarecer.

El conocimiento de los aspectos jurídicos quedará confinado en el cauce de su gobierno y deliberación interna, limitando su informe exclusivamente al tema técnico para el que fue requerida su intervención. Nunca deberá hacer apreciaciones en derecho ni otras extravagancias, extravíos en los que suele caer algún que otro audaz erudito.

No se le pide al perito que opine como jurista, se le pide que opine e informe como especialista médico, psiquiatra o psicólogo, únicamente.

La actividad pericial no tiene una finalidad asistencial (terapéutica), para cumplir con esta misión debe realizarse un diagnóstico clínico y etiológico y una labor pronóstica (en algunos casos), generalmente son actos médicos, con la excepción de la tarea que le compete y le es propia al psicólogo.

Hay que tener presente que es imprescindible, tanto para el médico como para el psicólogo, contar con una formación muy específica, teórica y práctica, así como con el conocimiento básico de las demás ciencias forenses, incluida la criminalística.

Cuando se realiza una pericia en el ámbito forense, es muy importante saber el objetivo de esta y tener claridad sobre a quién se van a dirigir los resultados. De manera general, se aplica con el fin de contestar las preguntas de la autoridad ministerial, contribuyendo a la procuración e impartición de justicia.

Cuánto más técnica es la cuestión sometida a decisión judicial, mayor importancia adquiere la pericia, ya que el perito no se limita a aportar datos para el debate forense, sino que emite opiniones que versan sobre la forma en que se produjo una acción sometida a investigación judicial. El progreso científico hizo variar la jurisprudencia, y utilizando los métodos actuales permite llegar a conclusiones certeras.

Una pericial debe contar con fundamento, bases y procedimientos para su elaboración debidamente actualizados, acordes a los avances históricos, científicos y tecnológicos para evitar errores y cuestionamientos posteriores. Una de las funciones principales que corresponden al perito es la de examinar con profundidad la situación planteada; por ello, el juez puede solicitar la participación de diversas ciencias, artes u oficios que considere necesarios para dilucidar los hechos controvertidos. El peritaje es el resultado de la labor pericial que se presenta a la autoridad en un documento escrito, que se agrega al expediente con el fin de que algunos elementos queden documentados para preservar la seguridad jurídica de lo actuado en la instancia específica. En el nuevo sistema, además de rendir la información escrita, el perito emitirá su opinión de manera verbal y deberá defender ante los participantes lo expresado, contestando las preguntas que les formulen las partes.

Esta condición facilita la comunicación directa entre los sujetos procesales, agilizando los procedimientos, en una relación totalmente adversarial en la que el debate juega un papel principal. La oralidad permite la discusión durante el proceso y tiene lugar en la audiencia, presentando los elementos de prueba ante el juez que juzga y sentencia la causa.

La pericia debe estar constituida por: **a)** Introducción, **b)** Planteamiento del problema, **c)** Desarrollo, **d)** Consideraciones, **e)** Conclusiones.

Todo esto cuando se cuenta con los elementos suficientes y necesarios; de no ser así, se emite un informe, dirigido al órgano de investigación, la fiscalía, explicando las razones por las cuales no se puede entregar un dictamen.

El dictamen pericial debe contener necesariamente los principios científicos en que se funda y la explicación detallada de las operaciones técnicas realizadas que realmente cumplan con la función de asesoramiento del juzgador, a quien corresponde valorar el acierto de las conclusiones periciales. Este documento tiene fuerza probatoria dependiendo de la competencia del perito, de los principios científicos en los que se funda, de la objetividad e imparcialidad con que se manejan los elementos de convicción.

### **Participación pericial del psiquiatra y psicólogo**

Los peritos psiquiatra y psicólogo son profesionales especializados, cuyas funciones son las de una persona de ciencia; las de un técnico que pone al servicio de la justicia sus conocimientos y procedimientos para orientar, aclarar o resolver los problemas que los funcionarios encargados de administrar justicia les plantean.

Específicamente, el psiquiatra y el psicólogo aplican sus conocimientos para identificar la conexión entre pensamiento, sentimiento y acción de la o las presuntas víctimas y presuntos victimarios. Deberán evaluar si el imputado “padecía alguna alteración mental que le impidiera comprender la criminalidad del acto o dirigir sus acciones en el momento del hecho ilícito”.

**Art. 67-** Presunta inimputabilidad en el momento del hecho. Si se presumiere que el imputado, en el momento de cometer el hecho, padecía alguna alteración mental que le impidiera comprender la criminalidad del acto o dirigir sus acciones, sus derechos de parte serán ejercidos por el defensor particular o, en su defecto, por el defensor público, con los apoyos y ajustes razonables que fueran necesarios, con comunicación al curador, si lo hubiere. Si el imputado fuere menor de dieciocho (18) años de edad sus derechos de parte podrán ser ejercidos también por sus padres o tutor, ello sin perjuicio de la intervención que prevea la Ley Orgánica del Ministerio Público.

O si el imputado tuviere una enfermedad sobrevenida que altere su salud psicopsiquiátrica y no le

permita la comprensión y la comunicación plenas de su “estar en juicio”.

**Art. 68-** Padecimiento mental sobreveniente. Si durante el proceso sobreviniere un padecimiento mental que restringiere la capacidad del imputado, el juez establecerá los apoyos y los ajustes razonables que sean necesarios, incluyendo el establecimiento de plazos especiales para el desarrollo del proceso, según el momento en que se produzca, sin perjuicio de que se lleven a cabo los actos para la averiguación del hecho que no requieran su presencia o se prosiga aquel contra los demás imputados. Se comunicará al juez en lo civil y al defensor particular o, en su defecto, al defensor público, la situación del imputado, a fin de que, en caso de ser necesario, se resuelva sobre las medidas de protección de derechos que correspondan de acuerdo a la legislación específica.

En el caso de la declaración de menores de edad, víctimas de trata de personas, víctimas de graves violaciones a derechos humanos o personas con capacidad restringida, se impone la participación de un psicólogo especialista de acuerdo con las condiciones de la víctima (Art. 164).<sup>11</sup>

El conocimiento del Código Penal es un elemento fundamental para los peritos psiquiatra y psicólogo, pues la tipificación del delito a investigar se basa en la conducta que debe valorarse. Tanto en el caso del presunto responsable como de la presunta víctima, debe buscarse detectar sintomatología psicopatológica relacionada con el delito referido para dar un sustento técnico bien fundamentado sobre la situación de las partes.

Estos peritos llevan a cabo sus funciones aplicando métodos y técnicas que les son propias y permiten fundamentar científicamente sus conclusiones.

La entrevista pericial puede estar asociada a técnicas y pruebas psicológicas, las cuales deben seleccionarse conforme a las características del peritado.

Un elemento importante que actualmente toma relevancia es considerar a la víctima como parte fundamental en el proceso, porque puede ocurrir que se realicen falsas denuncias.

La evaluación de la veracidad en el testimonio exige una preparación especial del psiquiatra y del psicólogo en este ámbito, ya que debe conocer las técnicas apropiadas para la edad y etapa de desarrollo de los involucrados.

Su participación en la investigación, conocida como autopsia psicológica, metodología que es innovadora, altamente especializada y que requiere conocimientos profundos de la psiquiatría y la psicología, de la elaboración de perfiles criminales, de conocimientos de psicopatología y de criminología; en los casos de muertes de causas dudosas, se debe tratar de identificar las características victimológicas que llevaron a la persona a la muerte violenta, abriendo líneas de investigación que contribuyan a esclarecer si se trató de un accidente, un suicidio o un homicidio.



## Conclusiones

El CPPF obliga al perito médico, psiquiatra y psicólogo, a tener una actitud dinámica y participativa en los estrados judiciales, teniendo que explicar y defender su trabajo pericial ante las partes en disputa, presentando los resultados de su trabajo pericial dentro del marco de la ética, dando certeza a las conclusiones a las que arriba, emitiendo opiniones objetivas y científicamente sustentables que deben ser útiles para ayudar a definir la litis en cuestión.

## Referencias

- Huelga decir, que cuando nos referimos a los peritos (masculino) lleva implícito el femenino, perita, del mismo modo que médico, médica y psicólogo, psicóloga.
- El sistema penal acusatorio es un sistema adversarial, donde las partes (la Fiscalía y la Defensa) se enfrentan en igualdad de condiciones ante un juez imparcial, quien, con base en las pruebas y argumentos, decide si condena o absuelve.
- El modelo procesal delineado por la Constitución distingue claramente la función de perseguir y acusar de la función de juzgar y penar, las cuales son independientes y distintas, y cada una de estas está a cargo de órganos diferenciados y autónomos y el principio acusatorio sintetizado en los aforismos latinos *ne procedat iudex ex officio* y *nemo iudex sine actore* (el juez no actúa de oficio y no hay juicio sin actor) tiene por finalidad asegurar que el tribunal que juzga no se encuentra comprometido con la imputación que está llamado a resolver, asegurando la imparcialidad del tribunal. Mostaccio, Julio Gabriel s/ homicidio culposo. Sentencia Corte Suprema de Justicia de la Nación. 17/2/2004.
- Como se advierte, el acusatorio es el único sistema de juzgamiento que tanto filosófica como normativamente se erige como acorde al debido proceso penal. De este modo es posible, separando los poderes de acción y jurisdicción, que el tribunal o jurado sean imparciales en abstracto, cualidad esencial e inherente al acto humano de hacer justicia. La garantía de la imparcialidad está normativamente impuesta por las constituciones y los tratados internacionales.
- Tipo penal o tipificación es la descripción precisa de las acciones u omisiones que son consideradas delito y a las que se les asigna una pena o sanción. Cada uno de los delitos que se pretenden castigar debe ser "tipificado", es decir descriptos con precisión. Si una conducta humana no se ajusta exactamente al tipo penal vigente no puede ser considerado delito por el juzgador.
- Art. 83-** Forma y contenido de la querella. La pretensión de constituirse en parte querellante se formulará por escrito, con asistencia letrada, en forma personal o por mandatario especial que agregará el poder y deberá contener:
  - Datos de identidad, domicilio y firma del querellante y, en su caso, también del mandatario;
  - Datos de identidad y domicilio del querellado o, si se ignora, cualquier descripción que sirva para identificarlo;
  - Una relación clara, precisa y circunstanciada del hecho, con indicación del lugar y el momento en que se ejecutó;
  - Las pruebas que se ofrezcan, indicando en su caso los datos que permitan llevar adelante su producción. Si se trata de testigos o peritos además de los datos personales y domicilio, se deberán indicar los puntos sobre los que deberán ser examinados o requeridos;
  - La acreditación de los extremos de personería que invoca, en su caso.
 La presentación se deberá acompañar con una copia del escrito para cada querellado. Si se omitiere alguno de los requisitos establecidos en este artículo, deberá intimarse a quien efectuó la presentación para que en el plazo de tres (3) días corrija el error u omisión, bajo apercibimiento de inadmisibilidad.
- Art. 386-** Imposición. Toda decisión que ponga término al procedimiento se pronunciará sobre el pago de las costas procesales. Estas serán impuestas a la parte vencida, salvo que los jueces hallen razón suficiente para eximirla total o parcialmente. Los representantes del MPF y los Defensores solo podrán ser condenados en costas en los casos de temeridad, malicia o culpa grave. Se aplicarán supletoriamente las disposiciones del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.
 

**Art. 387-** Contenido. Las costas comprenderán:

  - La tasa de justicia;
  - Los honorarios devengados por los abogados, procuradores y peritos;
  - Los demás gastos que se hubieren originado por la tramitación del proceso.

**Art. 388-** Condena. Las costas serán impuestas al acusado si fuera condenado. El precepto no regirá para la ejecución penal ni para las medidas cautelares. Si en una sola sentencia se pronunciaran absoluciones y condenas, los jueces establecerán el porcentaje que corresponda a cada uno de los responsables. Los condenados por un mismo hecho responderán solidariamente por las costas.

**Art. 389-** Absolución y archivo. Si la sentencia fuera absolutoria por haberse demostrado la inocencia del imputado, las costas serán soportadas por el Estado y el querellante, en la proporción que fije el juez. Cuando la persecución penal no pudiera proseguir, originando el archivo del procedimiento, cada parte soportará sus propias costas.

**Art. 390-** Acción privada. En el procedimiento por delito de acción privada los jueces decidirán sobre las costas de conformidad a lo previsto en este Título, salvo acuerdo de las partes.

**Art. 391-** Regulación, liquidación y ejecución. El director o jefe de la oficina judicial practicará la liquidación de los gastos y tasas judiciales. Se podrá solicitar la revisión de la liquidación dentro del plazo de cinco (5) días, ante el juez que se sortee a tal efecto. Los honorarios de los profesionales serán fijados por los

jueces dentro de los tres (3) días posteriores a la lectura de la sentencia o decisión.

La liquidación podrá ser revisada por el juez que reguló honorarios.

**Art. 392-** Remuneración. Los honorarios y demás gastos derivados de la intervención de los peritos corresponderán a la parte que los presentare.

Excepcionalmente, el juez podrá relevar a la parte, total o parcialmente, del pago de la remuneración del perito, si se demostrase que ella no cuenta con los medios suficientes para solventarlo o si, tratándose del imputado, la no realización de la diligencia pudiera producir un notorio desequilibrio de sus posibilidades de defensa. En este último caso, el juez regulará prudencialmente la remuneración del perito, tomando en cuenta los honorarios de referencia del respectivo colegio profesional, o en su defecto, los usuales en la plaza. El Estado asumirá el adelanto de los gastos, sin perjuicio de lo que se dispone en las reglas generales sobre distribución de costas.

**Art. 393-** Determinación de honorarios. Para la determinación de los honorarios se tendrá en cuenta el valor o importancia del proceso, las cuestiones de derecho planteadas, la asistencia a audiencias y, en general, todos los trabajos efectuados a favor del cliente y el resultado obtenido, conforme lo dispongan las leyes específicas que regulen la materia. Los honorarios de los demás intervinientes en el proceso se determinarán según las leyes respectivas.

8. **Art. 158-** Derechos y obligaciones del testigo. Capacidad para atestiguar. Desde el inicio del proceso penal y hasta su finalización, al testigo se le garantizará el pleno respeto de los siguientes derechos:

- a. A recibir un trato digno y respetuoso por parte de las autoridades competentes;
- b. Al pago de los gastos de traslado al lugar donde la autoridad competente designe;
- c. A la protección de la integridad física y moral, inclusive de su familia;
- d. A ser informado sobre los resultados del acto procesal en el que ha participado;

e. Si se tratare de una persona mayor de setenta (70) años, mujer embarazada o enfermo grave, a cumplir con el acto procesal en el lugar de su residencia o internación; tal circunstancia deberá ser comunicada a la autoridad competente con la debida anticipación.

El testigo no tendrá la obligación de declarar sobre hechos que le puedan acarrear responsabilidad penal. Los derechos reconocidos en este artículo deberán ser enunciados por el órgano competente al momento de practicar la primera citación del testigo.

Toda persona será capaz de atestiguar y, cuando no concurren las excepciones previstas en la ley, tendrá la obligación de comparecer si fuere citada para declarar la verdad de cuanto conociere y le fuera preguntado; no podrá ocultar hechos o circunstancias que guarden relación con la investigación.

9. **Art. 160-** Facultad y deberes de abstención. Podrán abstenerse de declarar el cónyuge o conviviente del imputa-

do, los parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, sus tutores, curadores y pupilos.

Las personas mencionadas serán informadas sobre su facultad de abstenerse antes de iniciar la declaración. Ellas podrán ejercerla aun durante su declaración, incluso en el momento de responder determinadas preguntas.

Deberán abstenerse de declarar sobre los hechos secretos que hubieren llegado a su conocimiento en razón del propio estado, oficio o profesión, los ministros de un culto admitido, los abogados, procuradores, escribanos, médicos, farmacéuticos, parteras y demás auxiliares del arte de curar; los militares y funcionarios públicos sobre secretos de Estado.

Estos últimos, no podrán negar su testimonio cuando sean liberados del deber de guardar secreto por el interesado.

10. **Art. 159-** Compulsión. Si el testigo no se presentara a la convocatoria se lo hará comparecer por medio de la fuerza pública.

A pedido de parte, el juez podrá disponer el arresto del testigo que, luego de comparecer, se negare a declarar. Asimismo, podrá ordenar, también a pedido de parte, el inmediato arresto de un testigo si careciera de domicilio y hubiera motivos razonables para creer que se ocultará o ausentará. Ambas medidas durarán el tiempo indispensable para recibir la declaración, el que nunca excederá de veinticuatro (24) horas.

11. **Art. 164-** Declaración de menores de edad, víctimas de trata de personas, graves violaciones a derechos humanos o personas con capacidad restringida. Si se tratare de víctimas o testigos menores de edad que a la fecha en que se requiera su comparecencia no hubiesen cumplido dieciséis (16) años, personas con capacidad restringida, y testigos-víctimas de los delitos de trata y explotación de personas u otras graves violaciones a derechos humanos, si la naturaleza y circunstancias del caso así lo aconsejasen, se deberá adoptar el siguiente procedimiento:

a. Serán entrevistados por un psicólogo especialista de acuerdo a las condiciones de la víctima;

b. Si la víctima fuera menor de edad o persona con capacidad restringida, el acto se llevará a cabo de acuerdo a su edad y etapa evolutiva, o adecuado a su estado de vulnerabilidad si fuera víctima del delito de trata o explotación de personas u otra grave violación a los derechos humanos;

c. En el plazo que el representante del MPF disponga, el profesional actuante elevará un informe detallado con las conclusiones a las que arribe;

d. El desarrollo del acto podrá ser seguido por las partes desde el exterior del recinto a través de un vidrio espejado, micrófono, equipo de video o cualquier otro medio técnico con que se cuente; en ese caso con anterioridad a la iniciación del acto, el juez o el representante del MPF, según el caso, hará saber al profesional a cargo de la entrevista las inquietudes propuestas por las partes así como las que surjan durante el transcurso del acto, las que serán canalizadas teniendo en cuenta las características del hecho y el estado emocional de la víctima;

e. Si la víctima estuviera imposibilitada de compare-

cer por motivos de salud o por residir en un lugar distante a la sede del tribunal, o para garantizar la protección de su seguridad, se podrá realizar el acto a través de videoconferencias;

f. Se podrá admitir la exhibición del registro audiovisual de declaraciones previas de la víctima en ese u otro proceso judicial. Si las partes requiriesen la comparecencia a los efectos de controlar la prueba, el juez les requerirá los motivos y el interés concreto, así como los puntos sobre los que pretendan examinar al testigo, y admitirá el interrogatorio solo sobre aquéllos que hagan al efectivo cumplimiento del derecho de defensa;

g. La declaración se registrará en un video filmico. Si se tratase de actos de reconocimiento de lugares o cosas, el menor de edad o la persona con capacidad restringida víctima del delito será asistido por un profesional especialista. Si se tratase del delito de trata o explotación de personas, la víctima será acompañada por un profesional especialista; en ningún caso estará presente el imputado.

Si se tratase de víctimas que a la fecha en que se requiere su comparecencia ya hubiesen cumplido dieciséis (16) años pero fuesen menores de dieciocho (18) años de edad, antes de la recepción del testimonio, se requerirá informe a un especialista acerca de la existencia de riesgo para la salud psicofísica del menor de edad en el caso de que compareciese ante los estrados judiciales en presencia de las partes. Esta medida debe llevarse adelante evitando la revictimización del niño, niña o adolescente.

### Bibliografía consultada

1. Aristizábal Diazgranados E, Amar Amar J. Psicología Forense. Estudio de la mente criminal. Universidad del Norte, Colombia 2012.
2. Armenta Deu T. Sistemas Procesales Penales. La justicia penal en Europa y América. ¿Un camino de ida y vuelta? Pons Marcial, Barcelona 2012.
3. Campohermoso Rodríguez O, Silva Malleaw G. Medicina Legal y Forense. Editorial Original San José, La Paz 2013.
4. Checa González Manuel J. Manual Práctico de Psiquiatría Forense. Elsevier, Barcelona 2010.
5. Esbec E. El psicólogo forense y la prueba pericial psicológica. Edisofer, Madrid 2000.
6. García E. Fundamentos de psicología jurídica y forense. Oxford, México 2010.
7. García Pérez T. Pericia en autopsia psicológica. Editorial La Rocca, Buenos Aires 2007.
8. Iguaran Arana MG. 100 Preguntas Sistema Penal Acusatorio. Colombia 2006. Disponible en: <http://biblioteca.cejamericas.org/bitstream/handle/2015/4786/10preguntasprocesopenal.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
9. Jauchen E. Tratado de Derecho Procesal Penal. Rubinzal, Buenos Aires 2012; Tomo I.
10. Kvitko LA. La peritación medicolegal en la praxis médica. La Rocca, Buenos Aires 2008.
11. Levene R. Manual de Derecho Procesal Penal. Editorial Depalma, Buenos Aires 1993; Tomo I.
12. Maier J. Derecho Procesal Penal. Fundamentos. Del Puerto, Buenos Aires 1999; Tomo I.
13. Maier J. Derecho Procesal Penal. Parte General. Sujetos Procesales. Del Puerto, Buenos Aires 2003; Tomo II.
14. Núñez de Arco J. Medicina Legal y Criminalística. Editorial Original San José, La Paz 2014.
15. Núñez de Arco J. Psicología Criminal y Criminalística. El Informe Pericial en Psicología y Psiquiatría Forense. Editorial Original San José, La Paz 2015.
16. Osorio y Nieto C. Teoría del caso y cadena de custodia. Editorial Porrúa, México 2011.
17. Pérez Correa C. Investigación del delito en la Ciudad de México: peritos y médicos legistas. Revista Mexicana de Justicia, Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Jurídicas, enero-diciembre, México 2010.
18. Righi E, Fernández AA, Pastoriza L. Elementos de Derecho Penal y Procesal Penal. Lerner, Buenos Aires 1988.
19. Rodes Lloret F. Enfermedad Mental. Aspectos médico-forenses. Ediciones Díaz de Santos, Madrid 2006.
20. Torres Neuquén L. Procesal Penal, Editorial Estudio, Buenos Aires 2013.
21. Urta J. Tratado de psicología forense. Siglo XXI, Madrid 2002.
22. Vargas Alvarado E. Medicina legal. Trillas, México 2012.
23. Villanueva Cañadas E. Gisbert Calabuig, Medicina Legal y Toxicología. Masson, Barcelona 2004.
24. Witthaus R. Prueba pericial. Editorial Universidad, Buenos Aires 2003.